

## MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Real orden de 2 de Junio de 1910, resolviendo el expediente relativo á las reclamaciones de los comerciantes, industriales, arrendatarios y poseedores de derechos reales, interesados en el Proyecto de reforma de la prolongación de la calle de Preciados y enlace de la plaza del Callao con la calle de Alcalá.

(Publicada en la *Gaceta* del 5 de Junio de 1910).

Excmo. Sr.: Pasado á informe de la Comisión permanente del Consejo de Estado el expediente relativo á las reclamaciones de los comerciantes, industriales, arrendatarios y poseedores de derechos reales, interesados en el *Proyecto de reforma de la prolongación de la calle de Preciados y enlace de la plaza del Callao con la calle de Alcalá*, dicho alto Cuerpo ha emitido en el mismo, con fecha 4 de Febrero último, el siguiente dictamen:

«Excmo. Sr.: La Comisión permanente del Consejo de Estado, ha examinado en cumplimiento de Real orden dictada por el Ministerio del digno cargo de V. E., el expediente sobre reclamaciones de comerciantes, industriales, arrendatarios y poseedores de derechos reales, interesados en el *Proyecto de reforma de la prolongación de la calle de Preciados y enlace de la plaza del Callao con la calle de Alcalá*».

Resulta: que por Real orden de 27 de Agosto de 1904, se dispuso la instrucción de un expediente, para que en él pudieran reclamar los poseedores de derechos por los conceptos citados, á cuyo efecto se consignó que el Gobernador debería requerir individualmente, según dispone el art. 23 de la ley de 18 de Marzo de 1895, á dichos interesados, otorgándoles un plazo de quince días para que justificaran su derecho, ajustándose á lo dispuesto en los artículos 20 de la ley y 9.º



del reglamento, remitiendo en seguida con su informe el expediente á ese Ministerio, para la resolución que procediera.

El Gobernador notificó esta resolución á los interesados, no sólo individualmente, sino por medio del *Boletín oficial*, para que llegara á conocimiento de aquéllos cuyo domicilio no era conocido.

Se presentaron 131 reclamaciones de comerciantes é industriales y 19 de arrendatarios y poseedores de derechos reales, acompañadas de los documentos que se indican en el estado de 26 de Junio de 1905, que aparece unido al extracto del Negociado correspondiente de ese Ministerio.

Después de emitir dictamen la Dirección general de Administración, V. E. conceptuó conveniente oír el parecer de la Comisión permanente de este Consejo, y mientras se evacuaba la consulta pedida, se remitieron y unieron al expediente varias instancias, solicitando en unas, que se indemnizara á todos los comerciantes é industriales, aunque no llevaran establecidos los diez años que determina la ley, así como á los que afecte el proyecto de reforma llamado de la Gran Vía, y en otras, para que se admitieran documentos y unas certificaciones expedidas por la Administración de Hacienda, de Madrid:

Emitido dictamen por esta Comisión permanente, se dictó, de acuerdo con el mismo, la Real orden de 16 de Abril de 1906.

En el dictamen se exponían las razones, por virtud de las cuales no procede acceder á la petición de reforma de la Real orden de 27 de Agosto de 1904, y disposiciones legales en que se fundaba, desestimando las peticiones formuladas en ese sentido, y se demostraba la necesidad de que, con arreglo á las disposiciones vigentes, estaba el Gobernador de emitir su informe, puesto que no lo había hecho, acerca de las reclamaciones presentadas.

Este Consejo resumió las consideraciones que al efecto expuso en las dos siguientes conclusiones, que al ser aceptadas por V. E., pasaron á serlo de la citada Real orden:

1.<sup>a</sup> Declarar que es improcedente modificar la Real orden de 27 de Agosto de 1904, ni las disposiciones en que se funda, de la ley de 18 de Mayo de 1895 y reglamento de 15 de Diciembre de 1906, y especialmente en sus artículos 6.º y 9.º, y

2.<sup>a</sup> Dar al expediente la tramitación prevenida en dicha Real orden, y en su consecuencia, disponer que el Goberna-

dor informe acerca de las reclamaciones presentadas, las cuales deberán ser resueltas en todas sus partes por ese Ministerio, en única instancia, y teniendo en cuenta las observaciones contenidas en el cuerpo de este dictamen.

Tramitado el expediente con arreglo á esta Real orden, la Comisión provincial, en 3 de Septiembre de 1907, manifestó que debían reclamarse las certificaciones no expedidas por la Alcaldía de Madrid y por la Delegación de Hacienda, y por Real orden de 20 de Marzo de 1908, se ordenó:

1.º Que el Gobernador civil, sin perjuicio de publicarlo en el *Boletín oficial*, notifique individualmente á los interesados que la Comisión provincial cita en su informe y que se expresaban, concediéndoles un nuevo plazo de treinta días para la presentación de los documentos que faltan unir á sus respectivos expedientes, los cuales habían de entregarse en el Gobierno civil.

2.º Que de esta disposición se diera traslado al Ayuntamiento y al Ministerio de Hacienda, para que, con premura, entregaran las certificaciones necesarias para resolver los expedientes.

3.º Que una vez completos éstos ó terminado el plazo de treinta días, remitirá el Gobernador lo actuado á informe de la Comisión provincial, y

4.º Que el plazo concedido es sólo á los efectos indicados, no autorizándose en modo alguno la presentación de nuevas reclamaciones, ni para los interesados á quienes se refiere esta disposición, ni para ningún otro.

Por el Gobernador, en cumplimiento de esta Real orden, se mandó insertar en el *Boletín oficial* el anuncio correspondiente, dando traslado á las autoridades indicadas y haciendo notificaciones, que llegaron á quince, en las que se hace constar que á D. Fernando Préstamo y á D. Vicente Martínez no se les pudo hacer la notificación, por no vivir en el domicilio que se había indicado, y que otras notificaciones sólo se firman por un inspector, remitiéndose por la Subsecretaría en 30 de Abril varios documentos no recogidos por los interesados, con explicaciones de los demás reclamados.

Remitido el expediente á informe de la Comisión provincial, ésta solicitó previamente se le indicara el estado del proyecto de la llamada Gran Vía, contestando la Dirección general de Administración que fué aprobado por las Reales



órdenes de 27 de Agosto de 1904 y 12 de Enero de 1905, sin que el Ayuntamiento haya desistido de su ejecución.

La Comisión provincial emitió un extenso informe, con el que se conformó el Gobernador, llegando á las siguientes conclusiones:

1.<sup>a</sup> Que procede reiterar en forma los requerimientos á los interesados Préstamo, Martínez Vaca y Furió, que no fueron notificados personalmente.

2.<sup>a</sup> Que deben estimarse catorce de las reclamaciones que enumera, formuladas por los poseedores de derechos reales.

3.<sup>a</sup> Que procede desestimar las restantes reclamaciones de poseedores de derechos reales, ó sean las que figuran con los números 1, 2, 9 y 15, por ser improcedentes.

4.<sup>a</sup> Que deben desestimarse las reclamaciones de los arrendatarios del Centro de Asturianos y D. Benito Valdivieso.

5.<sup>a</sup> Que deben estimarse las reclamaciones de 51 de los comerciantes é industriales que enumera.

6.<sup>a</sup> Que por injustificadas é improcedentes deben desestimarse todas las demás reclamaciones de comerciantes é industriales, que comprenden 131 de éstos, cuyos nombres expresa.

7.<sup>a</sup> Que también procede desestimar, por extemporáneos, los escritos de queja é instancias de D. José Rodríguez y otros, D. José Brunete, D. Alejandro Rodríguez y D. Ruperto Martínez, que solicitaron se ampliase el derecho á todos los comerciantes, cualquiera que sea el tiempo que llevan establecidos.

8.<sup>a</sup> Que procede unir á sus respectivas carpetas los documentos presentados por D. Juan Fernández, D. Manuel Bringas, D. Manuel Fernández y los remitidos por la Hacienda y por la Alcaldía, y

9.<sup>a</sup> Que procede desestimar en el fondo la reclamación de D. Joaquín Baquedano, Hortaleza, 5, papelería, por no presentar contrato de inquilinato, ni declaración jurada del dueño de la finca, según requiere el núm. 3.º del art. 9.º del reglamento.

Los Vocales de la Comisión provincial Sres. Argente y Goitia, estimaron, en oposición á sus compañeros, que sería más justo constar los decenios, aplicando, por interpretación extensiva, los artículos 4.º y concordantes de la ley de 26 de Julio de 1892, desde la fecha en que, adjudicada la subasta, comiencen los plazos de ejecución, que es cuando al comerciante se le impide la continuación de su industria.

El Gobernador, al remitir el expediente á ese Ministerio, no solamente manifestó su conformidad con lo informado por la Comisión provincial, sino que expone que sería de equidad, oír antes de resolver las reclamaciones de los propietarios, comerciantes, arrendatarios é industriales, que no reúnen los requisitos exigidos por el art. 4.º de la ley de 18 de Mayo de 1895.

La Dirección general de Administración se limita á dar por reproducido su dictamen de 4 de Julio de 1905, en el que ahora insiste.

Dicha Dirección general entonces exponía:

1.º Que antes de entrar en el examen, uno por uno de los expedientes, cree que es preciso hacer algunas aclaraciones para fijar el criterio con que va á realizar el análisis de los mismos.

2.º Que, en primer lugar, cree que no corresponde al Ministerio determinar el importe de la indemnización que fija-mente señala la ley en su art. 20, sino consignar si el reclamante tiene ó no derecho á la indemnización, debiendo hacerse la liquidación de la misma y designarse la cantidad exacta entre el interesado y el Ayuntamiento, representado por los Arquitectos municipales que formularon el proyecto y con audiencia del contratista de las obras.

3.º Que debe considerarse extinguido el plazo para reclamar, para los que no han presentado ningún documento ni justificado haberlo reclamado.

4.º Que no debe exigirse la certificación del Registro mercantil á los comerciantes particulares, pues aunque este requisito lo exige el art. 9.º del reglamento de 15 de Diciembre de 1896, debe entenderse que el reglamento en este punto, está en contradicción con la ley.

5.º Que debe negarse indemnización á los comerciantes é industriales que la fundan en traspaso, porque esto equivale á una industria nueva, y que, en cambio, debe otorgarse á los que cambian de industria en un mismo local, porque lo que se indemniza es el perjuicio por cambio del mismo.

6.º Que á las Sociedades les es exigible la inscripción en el Registro.

7.º Que las indemnizaciones han de ajustarse estrictamente al art. 20 de la ley, que para probar el tiempo de ejercicio habrá de estarse á la certificación de la Delegación de Ha-



cienda, dejando la determinación del alquiler para el momento de la liquidación.

8.º Que los arrendamientos no deben servir de título á la indemnización, si no están inscriptos en el Registro de la Propiedad.

9.º Que no pueden admitirse las reclamaciones sobre indemnización á poseedores de otros derechos reales, porque al tasarse las fincas no se han tenido en cuenta tales derechos ni se ha verificado la tasación rebajando del valor total de la propiedad las cargas, debiendo obligarse al propietario á que la entregue libre de cargas, si no se llega á un acuerdo para solucionar del mejor modo posible las dificultades que se originen, y

10. Y, por último, que no debe estimarse la instancia del Presidente de la Junta de Comerciantes é Industriales, porque las observaciones que hace no son pertinentes, una vez aprobado el proyecto, pasando después á dar opinión con arreglo al criterio expuesto acerca de las reclamaciones presentadas. Tal es el estado de los antecedentes, con arreglo á los cuales pasa el Consejo á emitir su dictamen.

El art. 4.º de la citada ley de 18 de Marzo de 1895, determina que serán parte legítima en el expediente que se forme para la ejecución de las obras de saneamiento y mejora interior de las poblaciones que cuenten 30.000 ó más almas, y tendrán derecho á ser indemnizados por la expropiación:

1.º Los que, según el Registro de la Propiedad, ó, en su defecto, según el padrón de riqueza, sean propietarios, ó al menos poseedores legítimos de las fincas que hubieren de ser objeto de la expropiación.

2.º Los que tengan sobre dichas fincas inscripto ó anotado en el Registro de la Propiedad algún derecho real;

3.º Los arrendatarios que tengan inscripto ó anotado su derecho en dicho Registro, y

4.º Los comerciantes é industriales que por espacio de diez años llevan ejerciendo su comercio é industria en el mismo local.

Fuera de los enumerados, nadie podrá reclamar contra el expropiante, en los expedientes á que esta ley se refiere.

En los artículos 20 y 23 de la misma ley, se señalan: en el primero, las reglas según las cuales ha de hacerse la tasación pericial de lo que haya de expropiarse, y estableciendo que

los *derechos reales* serán capitalizados y abonados en las formas y por los tipos autorizados por el uso en las localidades respectivas; los *derechos de los arrendatarios* serán abonados con un 5 por 100 de los alquileres pagados, si éstos excediesen de diez años, y los *derechos de los comerciantes* serán abonados con un 10 por 100 sobre los alquileres que hayan pagado en los diez últimos años consecutivos que lleven en sus establecimientos, y con un 5 por 100 sobre los alquileres de cada diez años más que aparezcan establecidos en el mismo local, hasta los cincuenta años como máximo, comprendiéndose en todas las tasaciones periciales una partida por daños y perjuicios de la expropiación y otra del 3 por 100 de afección, y determinándose en el segundo el procedimiento que han de seguir los expedientes en su tramitación. Los artículos 8.º y 9.º del reglamento de 15 de Diciembre de 1896, son concordantes con los preceptos legales citados. En la tramitación y resolución de este expediente hay que atenerse á la Real orden de 27 de Agosto de 1904 (*Gaceta* del 29), dictada, teniendo en cuenta las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, Real orden que ha sido ratificada por las de 16 de Abril de 1906 y 20 de Marzo de 1908, y por la cual se creó un estado de derecho, del que no es posible prescindir. La Comisión permanente de este Consejo, antes de estudiar detalladamente todas y cada una de las reclamaciones presentadas, estima necesario, como lo ha hecho ya en otros dictámenes sobre este expediente, establecer el criterio general, con arreglo al cual ha de proponer á V. E. estime ó rechace por improcedentes las solicitudes formuladas.

En las conclusiones 2.ª y 5.ª de la citada Real orden de 27 de Agosto quedaron definitivamente resueltas las reclamaciones producidas por varios comerciantes é industriales para la reforma de la ley de 18 de Marzo de 1895 y su reglamento.

Los artículos 20 de la ley y 9.º del reglamento, cuyo cumplimiento reiteradamente se recuerda en la Real orden de 27 de Agosto, exigen, para que puedan otorgarse los beneficios de la indemnización á los comerciantes é industriales que llevan diez años establecidos, que lo justifiquen con los documentos que expresa, entre los que figura la certificación de inscripción de los comerciantes.

No debe concederse indemnización á los arrendatarios que



no hayan inscrito su derecho en el Registro de la Propiedad, como dispone el art. 8.º del reglamento, de acuerdo con las disposiciones de la ley Hipotecaria, que exige tal requisito para que los arrendamientos puedan ser eficaces contra tercero.

Ni según la letra ni según el espíritu del art. 9.º del reglamento de 15 de Diciembre de 1896, se pierde el derecho á la indemnización por el hecho de que se cambie de industria ó comercio dentro del mismo local, siempre que reunan las condiciones y aduzcan las pruebas que el repetido artículo determina.

No puede negarse el derecho que tienen á ser indemnizados los causahabientes de una industria ó comercio, debiendo computarse, dentro del plazo de los diez años, el tiempo que la ejercieron los causantes, tanto si se adquiere por herencia, como si se obtiene por traspaso, ya que, con arreglo al Derecho civil, lo primero, y á los usos ó prácticas mercantiles el segundo, representa una verdadera subrogación en la personalidad comercial ó industrial anterior.

En cuanto á la cuestión que se suscita acerca del cómputo del plazo de los diez años, este Consejo debe decir que como al formarse el proyecto no se cumplieron las prescripciones legales aplicables, puesto que no se tasaron los derechos que ostentan los arrendatarios, comerciantes, industriales y poseedores de derechos reales, la Real orden, firme, de Agosto de 1904, subsanando en lo posible la omisión cometida, dispuso en su conclusión 2.ª la instrucción de un expediente, que es el actual, para que en él pudieran reclamar aquellos interesados, el cual debía ser instruido por el Gobernador, requiriéndoles individualmente para que justificaran su derecho y remitiéndolo después á la aprobación de ese Ministerio.

La ley de 18 de Marzo de 1895 estableció plazos perentorios, y en el último párrafo del art. 9.º del reglamento se dispuso que el plazo de los diez años se computara hasta la fecha de la aprobación definitiva del proyecto por el Gobierno.

Como no puede, en rigor, estimarse aprobado definitivamente el proyecto por la Real orden de 27 de Agosto de 1904, porque en 12 de Enero de 1905 se aprobó el pliego de condiciones facultativas y en 15 de Septiembre de 1908 las económicas, en las que se introdujeron modificaciones esenciales, y no se puede decir aprobado definitivamente un proyecto si no lo están los substanciales elementos que lo integran y consti-

tuyen, la Comisión permanente de este Consejo estima que el cómputo de los diez años debe contarse hasta el 15 de Septiembre de 1908.

Expuesto ya este criterio, que ha de servirle de base para estudiar las reclamaciones formuladas, este Consejo pasa ahora á analizarlas, para determinar claramente la procedencia ó improcedencia de las mismas.

*Poseedores de derechos reales.*—Según lo prescrito en el caso 2.º del art. 4.º de la ley de 18 de Marzo de 1895, y también caso 2.º del art. 8.º de su reglamento, no pueden ser parte legítima en el expediente, ni tienen derecho á indemnización, los que no tengan inscrito ó anotado en el Registro de la Propiedad los derechos reales que ostenten, lo cual han de probar por medio de certificación que dicha oficina expida, en que se haga constar las circunstancias de la anotación ó inscripción vigentes, según lo prescrito en el núm. 3.º del art. 18 de la ley y párrafo tercero del art. 9.º del reglamento.

De las reclamaciones formuladas por los poseedores de derechos reales, las que en el legajo correspondiente aparecen con los números 1, 2, 9 y 15, resultan presentadas sin justificar la inscripción ó la vigencia de la carga sobre la finca que gravan, y deben, por tanto, rechazarse por improcedentes, teniéndose en cuenta para la redención y prescripción de pensiones y de censos lo dispuesto en los artículos 1.611 y 1.966 del Código civil, y que las hipotecas exigen para su extinción la devolución del capital y los intereses vencidos y no pagados en los dos últimos años (art. 114 de la ley Hipotecaria).

En la liquidación de estos derechos reales se tendrá presente, que la cifra resultante en definitiva será á deducir del total valor asignado al inmueble que gravan, puesto que, según se afirma en la misma Real orden que ha originado este expediente, las tasaciones de los inmuebles se hicieron sin deducir en ellas aquellos gravámenes.

*Arrendatarios.*—Según el núm. 3.º del art. 4.º de la ley y núm. 3.º del art. 8.º del reglamento, no son parte legítima ni tienen derecho á indemnización los arrendatarios que no tengan inscrito ó anotado su derecho en el Registro de la Propiedad, probándolo por certificación que éste expida (núm. 3.º del art. 18 de la ley y párrafo tercero del art. 9.º del reglamento).

Como las reclamaciones presentadas por el presidente del



Centro Asturiano y por D. Benito Valdivieso, no cumplen con el requisito señalado, deben desestimarse por improcedentes.

*Comerciantes é industriales.*—Con arreglo á lo prescrito en el caso 4.º del art. 4.º, núm. 3.º del art. 18 y art. 20 de la ley, caso 4.º y párrafo cuarto de los artículos 8.º y 9.º del reglamento, serán parte legítima en el expediente, y tendrán derecho á indemnización los comerciantes é industriales que por espacio de diez años consecutivos lleven ejerciendo su comercio ó industria en el mismo local, siempre que lo prueben por medio de los documentos siguientes:

1.º Certificación expedida por el Gobernador de que constan inscritos en el Registro Mercantil por tiempo de diez años.

2.º Certificación expedida por el Delegado de Hacienda en que conste que durante dicho plazo de diez años aparecen inscritos, sin interrupción, en la matrícula de subsidio, y han satisfecho todas las cuotas de la contribución industrial y mercantil.

3.º Contrato de inquilinato por el que se justifique la fecha en que entraron á ocupar la finca, y en su defecto, declaración jurada del dueño del inmueble en que habite, de que durante diez años consecutivos han sido inquilinos del edificio, cuarto ó tienda á que la expropiación afecte, y

4.º Certificación del Alcalde, con referencia al padrón municipal, en que acredite que durante el plazo de diez años consecutivos tienen establecida la industria ó comercio en el edificio, cuarto ó tienda que se expropie.

Se prescribe en el art. 17 del Código de Comercio que la inscripción en el Registro Mercantil será potestativa para los comerciantes particulares y obligatoria para las sociedades que se constituyan con arreglo á dicho Código ó á leyes especiales y para los buques.

Con arreglo á este precepto legal, no es posible exigir á los comerciantes particulares la inscripción en el Registro, puesto que el mismo la declara potestativa para ellos y obligatoria para las sociedades y los buques.

En el caso 4.º del art. 4.º de la ley sobre Saneamiento ó mejora interior de poblaciones, de 18 de Marzo de 1895, sólo se exige á los comerciantes é industriales, para tener derecho á ser indemnizados por expropiaciones, que acrediten que, por espacio de diez años consecutivos, llevan ejerciendo su comercio é industria en el mismo local, pero no les obliga á

acreditar su inscripción en el Registro Mercantil, de que les exime el Código de Comercio al no imponérselo más que á las sociedades y á los buques.

En el reglamento para la ejecución de la ley citada, al desenvolver la Administración los principios formulados por el legislador, se exigió, art. 9.º, que los comerciantes é industriales acrediten su derecho á indemnización, presentando, entre otros documentos que señala, certificación de que no constan inscritos en el Registro Mercantil por tiempo de diez años.

La ley exigía taxativamente á los dueños de las fincas, poseedores de derechos reales y arrendatarios, que probasen su derecho, presentando certificación de la inscripción en el Registro de la Propiedad, pero á los comerciantes é industriales sólo les exigió que acreditaran los diez años de ejercicio, con lo cual cumplidamente se demuestra que el legislador no quiso derogar el correspondiente precepto del Código de Comercio, haciendo obligatorio lo que él había declarado potestativo.

La Administración, al exigir esa prueba á los comerciantes é industriales, infringió, no solamente el inmediato precepto de la ley, cuyo espíritu y alcance quiso desenvolver, sino el Código de Comercio.

La razón es obvia; los comerciantes particulares no podían acreditar su inscripción en el Registro Mercantil durante diez años en 1896, fecha del reglamento, porque lo que con relación á ellos disponía el Código de Comercio de 1885, era facultativo y no preceptivo, y, por tanto, en uso de su derecho, reconocido por la ley, podían permanecer ejerciendo sus industrias sin inscribirse, y como la fecha del reglamento es de 15 de Diciembre de 1896, publicado en la *Gaceta* del 20, sólo á partir de fines de Diciembre de 1906 habría podido empezar á tener aplicación la disposición en él adoptada de que se trata.

Pero es que el reglamento no pudo exigir ese requisito más que á las Sociedades, infringiendo la ley al extenderlo á los comerciantes particulares, que ejercían un derecho al amparo de una ley sustantiva y orgánica que no es posible desconocer, ni mucho menos derogar por ningún precepto que emane de la potestad reglamentaria del Gobierno.

La Administración no puede hacer obligatorio lo que el legislador quiso hacer potestativo.



Los comerciantes é industriales tienen, pues, derecho á indemnización siempre que prueben que vienen ejerciendo su comercio ó industria en el mismo local por tiempo de diez años consecutivos, sin necesidad de justificar que están inscritos en el Registro Mercantil, lo cual es sólo obligatorio para las Sociedades que tengan que cambiar su domicilio por consecuencia de la expropiación.

El caso 1.º del párrafo cuarto del art. 9.º del reglamento debe, pues, aclararse en el sentido de que su disposición no se refiere á los comerciantes particulares, sino á las Sociedades mercantiles.

Como en el último apartado del caso 4.º del art. 9.º del citado reglamento se prescribe que el plazo de los diez años se computará hasta la fecha de la aprobación definitiva del proyecto por el Gobierno, y éste, según lo expuesto, se aprobó en 15 de Septiembre de 1908, debe abrirse de nuevo el plazo para que los comerciantes é industriales que no lo hayan hecho puedan acreditar su derecho hasta esa fecha, figuren ó no en este expediente, puesto que la Real orden de 20 de Marzo de 1908 sólo abrió el plazo por treinta días para aquéllos que oportunamente habían ya reclamado, sin tener en cuenta que tenían derecho á justificar los diez años de ejercicio hasta 15 de Septiembre de dicho año de 1908.

Los escritos que se dicen firmados por el Presidente de la Junta formada por los comerciantes á quienes afecta el proyecto de la llamada Gran Vía, solicitando se les requiera y amplíe el derecho á la indemnización á todos, lleven ó no los diez años establecidos, y á los que, en lo sucesivo, se hallen interesados en proyectos análogos, no pueden estimarse, porque ello significaría clara y manifiesta transgresión á las disposiciones legales, y sabido es que la Administración no hace ni modifica leyes, únicamente las aplica según su espíritu y letra (párrafo final del art. 4.º de la ley y apartado 5.º de la Real orden de 20 de Mayo de 1908).

En cuanto á la manifestación del Gobernador de que, por equidad, deben oírse, antes de resolver, las reclamaciones de los propietarios, comerciantes, arrendatarios é industriales que no reúnen los requisitos exigidos por el art. 4.º de la ley de 18 de Marzo de 1895, este Consejo debe exponer que si esas reclamaciones no reúnen los elementos de justificación precisos, exigidos por la ley, no pueden realmente considerárselas

como tales reclamaciones, sino más bien como propósito frustrado de los interesados de formularlas, porque dentro del derecho positivo, el acto jurídico, para que lo sea, ha de reunir los requisitos que la ley exija en cada caso, y no teniéndolos, no puede dársele ese carácter, procediendo su desestimación. A los interesados se les ha concedido plazo para justificar su derecho; y por razones de equidad y de otro carácter que en el expediente aparecen, se abrió nuevamente, notificándoseles, no sólo por medio del *Boletín oficial*, sino individualmente, siendo, por tanto, á ellos imputable el defecto.

La equidad no puede ser base de resoluciones en la aplicación de las disposiciones vigentes cuando el precepto legal es terminante y claro; sólo al poder legislativo correspondería, en su caso, amparar esta clase de pretensiones. Resulta del expediente, y así lo afirman la Comisión provincial y el Gobernador, que al cumplirse por el Gobierno civil la Real orden de 20 de Marzo de 1908, por la que, como queda dicho, se abrió nuevo plazo para que los interesados en las citadas reclamaciones presentaran documentos á fin de justificar las que habían formulado, dejó de notificarse, con arreglo á lo prescrito en el art. 132 y siguientes del reglamento, á D. Fernando Préstamo (Hilario Peñasco, 4, taberna) y á D. Víctor Martínez (Tres Cruces, 3, frutería), á quienes no se les pudo hacer la notificación por no habitar en el domicilio que en los antecedentes se indicaba, é ignorarse su paradero, observándose además que las notificaciones que se hicieron á D. Catalino Vacas, D. Esteban Pérez y D. Carlos Furió, no se firman sino por un Inspector llamado Ballesteros, sin haber hecho entrega de cédula ó notificarles expresamente por el *Boletín oficial* y *Gaceta de Madrid*, tanto á los primeros como á los segundos; y como, según el art. 137 del reglamento, las notificaciones hechas sin haberse cumplido todos los requisitos y formalidades exigidas se tendrán por nulas, para evitar la concurrencia de vicios de origen, que pudieran invalidar algunos extremos de la resolución que se dicte, el Consejo estima que, antes de resolver sobre las reclamaciones formuladas por los expresados interesados, debe notificárseles nuevamente, con arreglo á las disposiciones citadas.

Este Consejo no cree necesario estudiar aquí la forma y modo de pago de las indemnizaciones, que corresponden á los



poseedores de derechos reales, arrendatarios, comerciantes é industriales, por fijarlos, por modo taxativo, la ley en su artículo 20, demás preceptos concordantes y su reglamento.

Con arreglo á las consideraciones expuestas, la Comisión permanente del Consejo de Estado, en resumen, opina:

«1.º Que deben desestimarse las reclamaciones formuladas por los poseedores de derechos reales, cuyos expedientes están señalados con los números 1, 2, 9 y 15, y estimarse todas las demás, si bien con la condición expresada de deducción ó rebaja de cargas á que se refiere el cuerpo de este dictamen.

»2.º Que asimismo deben desestimarse las reclamaciones formuladas por los arrendatarios, Presidente del Centro Asturiano y D. Benito Valdivieso.

»3.º Que los comerciantes particulares é industriales no tienen obligación de acreditar su inscripción en el Registro Mercantil por espacio de diez años, por ser este requisito únicamente exigible á las Sociedades de comercio, debiendo declararse por V. E. que el citado precepto del reglamento se refiere sólo á las Sociedades, no á los industriales y comerciantes particulares.

»4.º Que procede abrir de nuevo el plazo para todos aquellos comerciantes é industriales que no hayan justificado su derecho y quieran probar el ejercicio de su comercio é industria en el mismo local, por tiempo de diez años consecutivos, hasta el 15 de Septiembre de 1908.

»5.º Que no procede estimar las reclamaciones de indemnización de todos aquellos comerciantes é industriales que no lleven diez años establecidos en el mismo local, á quienes afecta el proyecto llamado de la Gran Vía, ni procede tampoco oír de nuevo á los interesados, á quienes se refiere el Gobernador en su comunicación, que no pueden justificar en derecho, con arreglo á lo prescrito en el art. 4.º de la ley citada de 18 de Marzo de 1895.

»6.º Que procede notificar y oír de nuevo, á los efectos de la Real orden de 20 de Marzo de 1908, y del nuevo plazo que se conceda, á D. Fernando Préstamo, D. Victor Martínez, D. Catalino Vacas, D. Esteban Pérez y D. Carlos Furió.

»7.º Que el pago de las indemnizaciones debe hacerse con arreglo á los tipos y formas señalados por la ley de 18 de Marzo de 1895 y su reglamento, y

»8.º Que una vez terminado el plazo que por V. E. se señale, y completo el expediente, se remita relación de las reclamaciones que cumplan los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes, y con el importe de la indemnización que solicita cada interesado al Ayuntamiento por medio de la Alcaldía, á fin de que, por sus peritos, y con la intervención de los interesados, pueda fijarse la entidad de la indemnización en cada caso».

Considerando que las conclusiones, 1.ª, 2.ª, 3.ª, 5.ª, 6.ª y 7.ª del dictamen anterior son en extremo aceptables y se inspiran en el cumplimiento estricto de la ley de 18 de Marzo de 1895:

Considerando que determinándose por la presente disposición que el plazo para computar el período de diez años consecutivos finaliza el 15 de Septiembre de 1908, es de necesidad imperiosa conceder un nuevo plazo para que, únicamente aquellos comerciantes é industriales que lleven en sus establecimientos diez años consecutivos hasta el indicado día 15 de Septiembre de 1908, siempre que este período de tiempo lo hayan completado desde el 27 de Agosto de 1904, puedan alegar su derecho, sin que se admitan otra clase de reclamaciones que no estén en las circunstancias reseñadas anteriormente:

Considerando que para computar el plazo de los diez años se tendrá en cuenta que si el comercio ó industria ha sido adquirido por herencia, ha de estimarse como no interrumpida la posesión por un mismo individuo, toda vez que la sucesión significa la continuación de todos los derechos y obligaciones, y la ley ha querido indemnizar el perjuicio personal por la privación momentánea de la explotación del negocio:

Considerando que, por el contrario, no es legal, cuando se trata de traspaso, computar el plazo en que la industria fué explotada por dos distintas personas, ya que, aparte de diversas razones que pudieran racionalmente aducirse, el espíritu y letra de la ley no quedarían cumplidos, porque se indemnizaría al último industrial ó comerciante, acumulándole el tiempo en que explotó y satisfizo los alquileres una tercera persona, y esta no puede ser la tendencia de la ley, que aspira á que la indemnización sea personal:

Considerando que de la conclusión 8.ª del dictamen anterior parece deducirse que el Consejo propone que se resuelva



cada una de las reclamaciones de comerciantes é industriales actualmente presentadas, al propio tiempo que las nuevas que se aduzcan, en virtud del plazo que por la presente se concede, y estando en ejecución el proyecto y las reclamaciones que figuran en este expediente, informadas separadamente cada una de ellas por la Dirección general de Administración, en 10 de Julio de 1905, informe ratificado en 14 de Julio de 1909 por la Comisión provincial y por V. E., es de necesidad evitar dilaciones y resolver respecto al fondo de las reclamaciones dichas, sin esperar á que expire el plazo que se concede para las nuevas reclamaciones, por haberse fijado como fecha para computar los diez años la de 15 de Septiembre de 1908, siempre que los diez años se hayan completado desde el 27 de Agosto de 1904, y de este modo se evitarán en lo posible inconvenientes para la ejecución de las obras:

Considerando que para decidir respecto al fondo de las presentes reclamaciones de comerciantes é industriales precisa tener en cuenta lo que dispone la ley de 18 de Marzo de 1895, el reglamento para su ejecución, dictado en 15 de Diciembre de 1896, lo preceptuado en la Real orden de 27 de Agosto de 1904 y las prevenciones aclaratorias que contiene la presente:

Considerando que el plazo para admitir las nuevas reclamaciones antes indicadas, debe ser, por lo menos, de treinta días, descontados los festivos, para que los comerciantes é industriales interesados tengan tiempo de aportar los documentos probatorios que exige el art. 9.º del reglamento de 15 de Diciembre de 1896, entendiéndose que para estas nuevas reclamaciones no precisa que V. E. verifique requerimiento individual en ninguna forma, debiéndose advertir que no se admitirán otra clase de reclamaciones que las de aquellos comerciantes ó industriales que lleven diez años consecutivos hasta el 15 de Septiembre de 1908, siempre que los hayan completado desde el 27 de Agosto de 1904, y justifiquen estos extremos; que se desestimarán todas las reclamaciones que no reunan tales circunstancias, y que el plazo comenzará á contarse desde la publicación del oportuno edicto en la *Gaceta de Madrid*, que redactará la Dirección general de Administración, en armonía con lo que en la presente disposición se indica, debiéndose presentar las reclamaciones en ese Go-

bierno de provincia, para que, una vez terminado el plazo, informen con toda urgencia á la Comisión provincial y V. E., y las remitan á este Ministerio para su examen.

En virtud de las razones expuestas,

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo en un todo con las conclusiones 1.ª, 2.ª, 3.ª, 5.ª, 6.ª, y 7.ª del dictamen de la Comisión permanente del Consejo de Estado, en lo esencial con la conclusión 4.ª, y oído dicho Alto Cuerpo respecto á la 8.ª, ha tenido á bien:

1.º Declarar que los comerciantes é industriales particulares no están obligados á acreditar la inscripción de su industria ó comercio en el Registro Mercantil, por ser este requisito únicamente exigible á las Sociedades, modificándose en este sentido el art. 9.º del reglamento de 15 de Diciembre de 1896, que se adicionará con el párrafo siguiente:

«El requisito de acreditar la inscripción en el Registro Mercantil exigido por el caso 1.º de este artículo, no se refiere á los industriales ó comerciantes particulares, sino á las Sociedades que se dediquen á la industria ó al comercio».

2.º Disponer que la Dirección general de Administración conceda un nuevo plazo de treinta días para que los comerciantes ó industriales que lleven diez años consecutivos hasta el 15 de Septiembre de 1908, siempre que los hubieran completado desde el 27 de Agosto de 1904, puedan presentar sus reclamaciones, ateniéndose, para formular este edicto, á las prevenciones contenidas en la presente disposición.

3.º Desestimar las reclamaciones de indemnización de todos aquellos comerciantes é industriales, á quienes afecte el proyecto, que no llevasen el 15 de Septiembre de 1908 diez años consecutivos establecidos en el mismo local y ejerciendo su industria ó comercio.

4.º Declarar que no procede oír de nuevo á los interesados á quienes se refirió V. E. en su comunicación, que no pueden justificar su derecho con arreglo á lo prescrito en el artículo 4.º de la ley de 18 de Marzo de 1895.

5.º Disponer que V. E. notifique y oiga de nuevo, por excepción, dentro del plazo que se concede, á D. Fernando Préstamo, D. Catalino Vacas y D. Victor Martínez, no haciéndolo respecto de D. Carlos Furió y de D. Pablo Esteban por haber aportado documentos que justifican su derecho á la indemnización, como asimismo á los demás comerciantes é in-



dustriales que figuran en el estado núm. 5, de los que se insertan á continuación de la presente.

6.º Disponer que el pago de las indemnizaciones se verifique con arreglo á los tipos y forma señalados por la ley de 18 de Marzo de 1895 y su reglamento.

7.º Declarar que se contará como no interrumpido el tiempo para el cómputo de los diez años, en el caso de que el comercio ó industria se haya adquirido por herencia, pero no se estimará tal circunstancia cuando la industria ó comercio se explote en virtud de traspaso.

8.º Declarar que al Ayuntamiento corresponde practicar la liquidación y pago de las reclamaciones relativas á los comerciantes, industriales, poseedores de derechos reales y arrendatarios, cuyo derecho á ser indemnizados se declara y reconoce por esta disposición, así como las reclamaciones de comerciantes é industriales que fueron resueltas por la Real orden de 27 de Agosto de 1904, y que, en su día, corresponde igual derecho á la Corporación municipal respecto de las reclamaciones que se produzcan, en virtud del nuevo plazo que se concede.

9.º Desestimar las seis reclamaciones formuladas por los poseedores de derechos reales y arrendatarios, señaladas en el estado núm. 1 que se inserta á continuación.

10. Estimar las trece reclamaciones de los poseedores de derechos reales y arrendatarios que contiene el estado núm. 2.

11. Desestimar las ocho reclamaciones de los comerciantes é industriales, que comprende la relación ó estado núm. 3.

12. Estimar las 106 reclamaciones de los comerciantes é industriales, reseñadas en el estado núm. 4, que, como los anteriores, se inserta á continuación de la presente Real orden, y

13. Declarar que los 19 comerciantes é industriales que figuran en el estado núm. 5, pueden justificar su derecho en la forma que se le señala, en el mismo plazo de treinta días, deducidos los festivos, concedido por esta Real orden para aquéllos que cumplan el término de los diez años consecutivos, completándolos desde el 27 de Agosto de 1904, el día 15 de Septiembre de 1908, debiéndose por ese Gobierno notificar individualmente á todos los 19 comerciantes é industriales que comprende el referido estado núm. 5.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos, remitiéndole:

1.º Los seis expedientes de reclamaciones de poseedores de derechos reales y arrendatarios que se desestiman por la presente, para que los devuelva al Ayuntamiento de esta Capital.

2.º Los 13 expedientes relativos á reclamaciones de poseedores de derechos reales y arrendatarios que se estiman por la presente, á fin de que el Ayuntamiento practique su liquidación y pago cuando corresponda.

3.º Los ocho expedientes de reclamaciones de comerciantes é industriales que se desestiman por esta disposición.

4.º Los 106 expedientes relativos á reclamaciones de comerciantes é industriales que se estiman por la presente Real orden.

5.º Los 19 expedientes de reclamaciones de comerciantes é industriales á quienes se concede ampliación de plazo para justificar su derecho, con objeto de que por ese Gobierno se verifiquen individualmente las notificaciones.

6.º Los 13 expedientes de reclamaciones de comerciantes é industriales que fueron resueltos por la Real orden de 27 de Agosto de 1904, para que por el Ayuntamiento se practique la liquidación oportuna y el pago en su día, y

7.º El expediente original instruido en ese Gobierno, con el informe de la Comisión provincial, advirtiéndole á V. E. que, conforme á lo que se indica en la presente disposición, por ese Gobierno se han de admitir durante el plazo de treinta días, descontados los festivos y computados, á partir del día siguiente al en que se publique en la *Gaceta de Madrid* la orden de la Dirección general de Administración, las reclamaciones que presenten los comerciantes é industriales que lleven diez años consecutivos hasta el 15 de Septiembre de 1908, siempre que los hayan cumplido desde el 27 de Agosto de 1904, reclamaciones que, una vez terminado el plazo, han de ser informadas por la Comisión provincial y por ese Gobierno en el más breve término posible, y remitidas á este Ministerio, para los fines á que haya lugar.

Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2 de Junio de 1910.—*Merino*.

Sr. Gobernador de la provincia de Madrid.



ESTADO NÚM. 1

RECLAMACIONES de poseedores de derechos reales y arrendatarios que se desestiman por la anterior Real orden.

NÚMERO	CALLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CONCEPTO POR EL QUE RECLAMAN
1	Isabel la Católica, 25.....	Sr. Marqués de Canillejas.....	Censo.
2	Jacometrezo, 23. ....	Idem. ....	Idem.
3	San Bernardo, 17.....	D. Lorenzo García Vela.....	Idem.
4	Clavel, 2.....	Centro Asturiano. ....	Arrendamiento.
5	Jacometrezo, 44.....	Sr. Conde de Belchite.....	Censo.
6	San Miguel, 21.....	D. Bruno Valdivieso.....	Arrendamiento.

Madrid 2 de Junio de 1910.



# ESTADO NÚM. 2

## RECLAMACIONES de poseedores de derechos reales y arrendatarios que se estiman por la anterior Real orden.

NÚMERO	CALLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CONCEPTO POR EL QUE RECLAMAN
1	Jacometrezo, 3, y San Jacinto, 4..	D. Vicente Martín.....	Censo.
2	Flor Alta y Justa.....	Sres. Herederos de Bringas....	Idem.
3	Caballero de Gracia, 11; San Miguel, 10, é Isabel la Católica, 25.	Sra. Marquesa de Canillejas.....	Idem.
4	Isabel la Católica, 29.....	D. <sup>a</sup> Magdalena Varela.....	Derecho real.
5	Varias fincas.....	Sr. Marqués de Urquijo..	Censo.
6	Hortaleza, 14, y San Miguel, 8....	D. Joaquín Logares.....	Idem.
7	Silva, 16.....	D. <sup>a</sup> Lorenza García Mínguez.....	Hipoteca.
8	Peralta, 8.....	D. Rafael Casas... ..	Censo.
9	Jacometrezo, 8.....	Sr. Conde de San Rafael.....	Idem.
10	Clavel, 2.....	Sra. Condesa de Santa Coloma.....	Derecho real.
11	Hortaleza, 12.....	Sr. Conde de Santa Coloma.....	Idem.
12	Jacometrezo, 16 y 23.....	Sra. Condesa de Revillagigedo.....	Censo.
13	Varias fincas.....	Banco Hipotecario.....	Hipoteca.

Madrid 2 de Junio de 1910.

# ESTADO NÚM. 3

## RECLAMACIONES de comerciantes é industriales que se desestiman por la anterior Real orden.

NÚMERO	CALLES	NOMBRES Y APELLIDOS	COMERCIO Ó INDUSTRIA	OBSERVACIONES
1	San Miguel, 4..	D. Antonio González y Doval.....	Taberna.....	Por no acreditar los diez años.
2	Idem, 6.....	» Felipe Cano y Parrondo.....	Carbonería.....	Idem.
3	Silva, 23.....	» Jesús González....	Comestibles.....	Por no haber justificado documental- mente.
4	Isabel la Católica, 27..	» Justo Prieto.....	Ultramarinos.....	Idem.
5	Jacometrezo, 17, 2. <sup>o</sup> ..	» Luis Sánchez Cuervo.....	Academia.....	Idem.
6	Reina, 4.....	» Manuel Carbonero Sol .....	Empresa periodística..	Idem.
7	Alcalá, 45 .....	» Sara Pesado.....	Dentista.....	Por no justificar los diez años.
8	Fuencarral, 1 y 3.....	» Vicente Íñiguez....	Mercería.....	Idem y por no presentar los documentos.

Madrid 2 de Junio de 1910.



ESTADO NÚM. 4

RECLAMACIONES de comerciantes é industriales que se admiten por la anterior Real orden.

NÚMERO	CALLES	NOMBRES Y APELLIDOS	COMERCIO Ó INDUSTRIA
1	Reina, 14 duplicado.....	D. Alejandro García Guillén..	Gimnasio.
2	Silva, 16.....	» Antonio Moreno Dobla.....	Broncista.
3	Tudescos, 30 y 32.....	» Antonio Naredo.....	Vinos.
4	Idem, 37.....	» Alejandro Maestro.....	Almoneda.
5	Jacometrezo, 26 y 28.....	» Ambrosio García Arenas.....	Dentista.
6	Idem, 3 y 5.....	» Antonio Rodríguez Espino.....	Platería.
7	San Miguel, 18.....	» Angel Molinero.....	Carpintería.
8	Caballero de Gracia, 17.....	» Anselmo Abajo.....	Flores naturales.
9	Mesonero Romanos, 30.....	» Angel Alonso Puerta.....	Fumista.
10	Caballero de Gracia, 9.....	» Antonio Pérez Díaz.....	Sombrerería.
11	Idem, 27.....	» Antonio Huidobro.....	Coches de lujo.
12	Idem, 23 duplicado.....	» Antonio Sáez Perpiñán.....	Tienda de calzado.
13	Clavel, 3.....	» Bernardo Gil Díez.....	Ultramarinos.
14	Jacometrezo, 5.....	» Celedonio Nales Larrea.....	Almacén de aguardien- tes.
15	Idem, 80.....	» Casimiro de Castro .....	Ultramarinos.
16	Idem, 7 y 9.....	» Claudio Gallego Sanz.....	Camisería.
17	Caballero de Gracia, 25.....	D. <sup>a</sup> Carolina Rotache Gordo.....	Quitamanchas.
18	Hortaleza, 1.....	» Cándida Zugasti.....	Fábrica de corsés.
19	Fuencarral, 5.....	» Carolina Franco.....	Zapatería y modista.
20	Caballero de Gracia, 29 y Desen- gaño, 9 y 11.....	» Carmen García y García.....	Tinte.
21	Caballero de Gracia, 25.....	D. Dionisio Zapatero López.....	Tienda de harinas.
22	Federico Balart, 1 y 3.....	D. <sup>a</sup> Dominica Moreno y Pastor.....	Gaseosas.
23	Fuencarral, 9.....	Denti, hermanos .....	Camisería fina.
24	Jacometrezo, 19 y 21.....	D. <sup>a</sup> Eusebia Lino Varela.....	Venta de gorras.
25	Silva, 25.....	D. Esteban Fernández Segura.....	Tablajero.
26	Tudescos, 36.....	» Esteban Ruiz Serrano.....	Pompas fúnebres.
27	Clavel, 6.....	D. <sup>a</sup> Emilia Parrondo.....	Relojería.
28	Abada, 28 y 30.....	D. Eduardo Fernández y González.....	Carpintería.
29	Jacometrezo, 19 y 21.....	» Enrique Martí y García.....	Tejidos.
30	San Bernardo, 10.....	» Eugenio García Comendador .....	Confitería.
31	Plaza del Callao, 22.....	» Felipe Urtuerta.....	Tejidos.
32	Tudescos, 34.....	» Francisco Caloto y Cano.....	Hojalatería.
33	Jacometrezo, 43.....	» Federico Vázquez y Namela.....	Muebles.
34	Hortaleza, 1.....	» Felipe Llamas y Tapides.....	Peluquería.
35	Idem, 4.....	» Francisco Monterde y Lucas.....	Sastrería.
36	Mesonero Romanos, 26.....	» Francisco del Cura Crespo.....	Taller de planchado.
37	Silva, 25.....	» Francisco Torres Martín.....	Cacharrería.
38	Idem, 29.....	D. <sup>a</sup> Filomena Martínez.....	Almacén de vinos.
39	Idem, 24.....	D. Francisco Gancedo Menéndez.....	Expendeduria de ta- baco.
40	Mesonero Romanos, 21.....	» Francisco Arias.....	Cerrajería.
41	Fuencarral, 1, entresuelo.....	» Faustino Belloso y Galván.....	Peluquería.
42	Idem, 2.....	» Gaspar Rodríguez y Rodríguez.....	Sastrería.
43	Silva, 15.....	» Guillermo Carchinena Laverne.....	Tahona.
44	Caballero de Gracia, 23 duplicado.	» Gabriel Robett.....	Farmacia.
45	Jacometrezo, 11.....	» Guillermo Alonso Blas.....	Pescadería.
46	Flor Baja, 22.....	» Isidro Gilolmo y Crespo.....	Encuadernación.
47	Torres, 7.....	D. <sup>a</sup> Isabel García y Martínez.....	Fábrica de velas.
48	Jacometrezo, 30.....	D. José González Rodríguez.....	Lanería.
49	Caballero de Gracia, 11.....	» José Morato Calvo.....	Zapatería.
50	Horno de la Mata, 11.....	» José Toral y González.....	Ultramarinos.



NÚMERO	CALLES	NOMBRES Y APELLIDOS	COMERCIO Ó INDUSTRIA
51	Tudescos, 22.....	D. Juan López Balboa.....	Ultramarinos.
52	Hortaleza, 1.....	» Joaquín Balduz y Murillo.....	Laneria.
53	Hita, 6.....	» José Solares Bear.....	Marmolista.
54	Hilario Peñasco, 1.....	» José Martín Díaz.....	Hojalatero.
55	Jacometrezo, 17.....	» Juan Carrero Pérez.....	Tienda de abanicos.
56	Idem, 6.....	» Juan García Aguado.....	Ultramarinos.
57	Idem, 11.....	D. <sup>a</sup> Juana Guerra Calvo.....	Panadería.
58	Clavel, 1.....	» Josefa Sánchez Allue.....	Huéspedes.
59	Jacometrezo, 40 y 42.....	Sociedad de la Fuente y Esteban.....	Ultramarinos.
60	San Bernardo, 8.....	D. Juan Alvarez y Alvarez.....	Platería.
61	Clavel, 3.....	» José Martín Ventura.....	Horno de bollos.
62	San Bernardo, 12.....	» José Guerra Pérez.....	Taberna.
63	Víctor Hugo, 6.....	» José Moreno Caro.....	Carpintería.
64	Jacometrezo, 1.....	» Juan del Hierro.....	Sastrería.
65	Torres, 3.....	» José Alvarez Menéndez.....	Carbonería.
66	Desengaño, 2.....	» Juan José Serrano Van.....	Ropas.
67	San Jacinto, 2.....	» Juan Alonso y Cobo.....	Lechería.
68	Reina, 20.....	» Juan Moreno Esteban.....	Cerrajería.
69	Jacometrezo, 37.....	» Julián Orellana y Aguado.....	Ferretería.
70	Desengaño, 6.....	» Jacobo & Josef Kon.....	Venta de muebles.
71	Jacometrezo, 37 y 39.....	» José Núñez López.....	Venta de calzado.
72	Idem, 32.....	» José García de Lachica.....	Litografía.
73	Jacometrezo, 1.....	» Leandro Catalán y Sanz.....	Tienda de vinos.
74	Idem, 23.....	» Miguel Vega Martín.....	Ultramarinos.
75	Hortaleza, 1.....	» Manuel Muñoz y Solís.....	Objetos de escritorio.
76	Hita, 11.....	D. <sup>a</sup> María Nieto y Bueno.....	Tallista.
77	Jacometrezo, 36 y 38.....	D. Mariano Maldonado Bartolomé.....	Muebles.
78	Reina, 22.....	D. <sup>a</sup> Manuela Díaz.....	Panadería.
79	Clavel, 9.....	D. Marcos Sanz y Sanz.....	Ultramarinos.
80	Jacometrezo, 8 y travesía del Desengaño, 2.....	» Manuel Fernández Suárez.....	Bollería.
81	Jacometrezo, 58.....	» Nicolás Cerezo Sanz.....	Cacharrería.
82	Tudescos, 24.....	» Prudencio Descalzo y Pérez.....	Barbería.
83	Clavel, 4.....	» Pedro Molinuevo y Largacha.....	Mercería.
84	Jacometrezo, 15.....	» Policarpo Ruiz y Torres.....	Tejidos.
85	Hortaleza, 1.....	» Quintín Llorente Izquierdo.....	Fábrica de cestas.
86	Céres, 3.....	» Raimundo Yrigoyen.....	Carpintería.
87	Leganitos, 40.....	» Ramón Sáiz y Revuelta.....	Ultramarinos.
88	Fuencarral, 2.....	» Ruperto Cuesta y Santiago.....	Guantería.
89	Horno de la Mata, 15.....	» Rafael Sanjaume Riera.....	Droguería.
90	Leones, 5.....	» Ramón Antón y Santiago.....	Carbonería.
91	Idem, 1.....	» Servando Prieto y Riesco.....	Comestibles.
92	Idem, 12.....	» Sabino Martínez.....	Vinos.
93	Desengaño, 17.....	» Víctor Méndez Gil.....	Hojalatería.
94	Jacometrezo, 78.....	» Vicente Cobos y García.....	Tornero.
95	Caballero de Gracia, 21.....	» Vicente Soriano.....	Papelería.
96	Hilario Peñasco, 2.....	» Federico Gschwind.....	Venta de hules.
97	Hortaleza, 5.....	» Joaquín Baquedano y García.....	Objetos de escritorio.
98	San Miguel, 7.....	» Carlos Insiot.....	Obrador de planchado.
99	Hortaleza, 10.....	» Rafael Martín Vicente.....	Sastre.
100	Caballero de Gracia, 31.....	D. <sup>a</sup> María Parandiet.....	Profesora de lenguas.
101	Desengaño, 15.....	D. Bernardo de la Vega.....	Ultramarinos.
102	Jacometrezo, 24.....	Sociedad Escolat y Pinillos.....	Alfombras.
103	Hita, 4.....	D. Ignacio Merendón.....	Farmacia.
104	Hilario Peñasco, 5.....	» Esteban Pérez Isla.....	Carbonería.
105	Plaza del Callao, 6.....	» Eugenio y Teodoro Sáinz Romillo.....	Almacenes de papel y vinos.
106	Jacometrezo, 10 y 12.....	» Jorge Balaguer Bauza.....	Pastelería.

Madrid 2 de Junio de 1910,



ESTADO

RECLAMACIONES relativas á los comerciantes é industriales á  
según se dispone en la

NÚMERO	CALLES	NOMBRES Y APELLIDOS
1	Tudescos, 26 y 28.....	D. José Rodríguez Inestal.....
2	Caballero de Gracia, 21....	» Juan Blanch.....
3	Idem, 19 y 21.....	Sociedad Gómez y Matute.....
4	Tudescos, 31.....	D. Mariano García Herrera.....
5	Jacometrezo, 50.....	» Tadeo Rubio.....
6	Caballero de Gracia, 17....	D. <sup>a</sup> Angela y Magdalena Bercot..
7	Jacometrezo, 11.....	D. Baltasar Alvarez y Cosmen....
8	Salud, 19.....	» Eusebio Fernández Moreno....
9	Fuencarral, 9.....	» Joaquín Ferrer de la Cuesta...
10	Idem, 2.....	Idem.....
11	Jacometrezo, 11.....	D. José Pereantón.....
12	Mesonero Romanos, 31.....	Sres. Gasset y Compañía.....
13	San Miguel, 23, y Caballero de Gracia, 31.....	Sucesores de Lino Fernández.....
14	Jacometrezo, 23.....	D. Ramón Reigosa.....
15	Caballero de Gracia, 9.....	» Ramón Soriano.....
16	Jacometrezo, 6.....	D. <sup>a</sup> Sofia Salazar.....
17	Hilario Peñasco, 8.....	D. Catalino Vacas del Pozo.....
18	Idem, 4.....	» Fernando Préstamo.....
19	Tres Cruces, 8.....	D. <sup>a</sup> Victoria Martínez Fernández..

Se exige á varios de estos interesados la presentación del certificado para justificar  
de las dependencias de Hacienda.  
Madrid 2 de Junio de 1910.

NÚM. 5

quienes se concede ampliación de plazo para justificar su derecho,  
anterior Real orden.

COMERCIO Ó INDUSTRIA	OBSERVACIONES
Ultramarinos.....	Para que justifique que ejerce su industria diez años consecutivos hasta el 15 de Septiembre de 1908.
Venta de calzado.....	Para que justifique su cualidad de heredero de D. Jaime Cortadella.
Quincalla y bisutería.....	Que acredite la Sociedad su inscripción en el Registro Mercantil.
Vidriero y hojalero.....	Que justifique su parentesco con D. Francisco de la Torre.
Gorras y monteras.....	Que acredite ser heredero de su antecesor en la industria.
Sombreros.....	Que justifique los diez años hasta el 15 de Septiembre de 1908 y presente certificado de Hacienda.
Quesos y mantecas.....	Que justifique los diez años hasta el 15 de Septiembre de 1908.
Zapatería.....	Para que presente certificado de Hacienda acreditando el pago de la contribución industrial.
Peluquería.....	Idem y certificación del Ayuntamiento.
Perfumería.....	Idem id.
Comerciante.....	Para que presente certificación del Ministerio de Hacienda.
Empresa <i>El Imparcial</i> ....	Para que acrediten la inscripción de la Sociedad en el Registro Mercantil.
Almacén de muebles.....	Idem id.
Panadería.....	Para que presente certificación de Hacienda.
Zapatería.....	Idem id.
Lotería.....	Para que acredite los diez años, computando el tiempo hasta el 15 de Septiembre de 1908, y justifique por medio del Ministerio de Hacienda el ejercicio de la industria y que sucedió en la misma á su esposo.
Panadería.....	Para que el Gobernador le requiera individualmente y acredite su derecho en el plazo que cóncede la anterior Real orden.
Taberna.....	Idem id.
Despacho de pan.....	Idem id.

satisfacen la contribución industrial, por acreditar que oportunamente la reclamaron.



# ESTADO NÚM. 6

RECLAMACIONES de comerciantes é industriales que fueron resueltas favorablemente por la Real orden de 27 de Agosto de 1904.

NÚMERO	CALLES	NOMBRES Y APELLIDOS	COMERCIO Ó INDUSTRIA
1	Fuencarral, 5.....	Sres. Cabrera y Ares.....	Camisería.
2	Clavel, 4.....	D. Gregorio Arias.....	Droguería.
3	Idem.....	» Eduardo Núñez.....	Platería.
4	Caballero de Gracia, 15. ....	» Antonio Lambea.....	Fábrica de paraguas.
5	Idem, 23.....	Sres. Yotti y Compañía.....	Hotel de Roma.
6	Jacometrezo, 1.....	D. Ezequiel Llaguno.....	Fábrica de chocolates.
7	Idem, 17.....	Sres. Hijos de Mahou.....	Despacho de colores.
8	Idem, 44.....	» Sobrinos de Baranda.....	Curtidos.
9	Leganitos, 38.....	D. Julio Fernández Espina.....	Farmacia.
10	Travesía del Desengaño, 4 y 6....	» Juan Miguel Escarbasiel.....	Tahona.
11	Clavel, 2.....	» Pedro del Castillo.....	Camisería.
12	Idem, 6.....	» Vicente Sáiz Pérez.....	Compraventa mercan- til.
13	Idem, 2.....	» Antonio Butragueño.....	Sastrería.

Madrid 2 de Junio de 1910.



## MINISTERIO DE LA GOBERNACION

### Real orden.

Excmo. Señor: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 39 propietarios de fincas comprendidas en el proyecto de *Reforma de la prolongación de la calle de Preciados y enlace de la plaza del Callao con la calle de Alcalá*:

Resultando que, protestando de que no se oponen en lo más mínimo á que se realice la mejora, manifiestan:

Que existe una cuestión de derecho que versa sobre la validez y eficacia de tasaciones efectuadas hace más de seis años;

Que será lesivo para los intereses del Ayuntamiento verificar el pago de las expropiaciones;

Que ni el Código civil ni las sentencias del Tribunal Supremo contienen precepto ni principio que autorice contratos por tiempo indeterminado;

Que la Real orden de 12 de Marzo de 1904, declaró que el pago de las tasaciones en los expedientes de expropiación forzosa habrá de hacerse dentro del plazo de seis meses, pasado el cual quedaban caducadas;

Que las tasaciones del proyecto resultan caducadas por que se hicieron con sujeción al art. 52 de la ley de 18 de Marzo de 1895, el que determina que las expropiaciones han de pagarse á los sesenta días de autorizarse la escritura para la ejecución del proyecto;

Que la Real orden de 26 de Agosto de 1909, dividió el proyecto en cuatro secciones, y resultará que los propietarios de la última sección cobrarán á los seis años:



de las leyes de Reforma interior, Ensanche y Expropiación, expedido tuvieron y tienen el camino para acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa, como ya lo efectuaron varios interesados, reclamando contra la primera Real orden, dictada en el proyecto con fecha 27 de Agosto de 1904, procedimiento seguido por uno de los firmantes de la presente instancia, D. Manuel Carbonero y Sol, que ha deducido demanda contra la Real orden de 15 de Septiembre de 1908, aprobatoria de la modificación del pliego de condiciones:

Considerando que, entre las Reales órdenes cuya revisión en principio y cuya nulidad finalmente se pretende existen varias que han adquirido caracteres de firmeza por haber conocido de ellas el Tribunal Supremo, ó por haberlo logrado mediante el transcurso del tiempo y el silencio de los interesados, y en aquellas que no reúnen semejante condición, las que da el derecho de reclamar contra las mismas:

Considerando que, este Ministerio, además de carecer de competencia para ello, no puede, no sólo admitir ni entrar á discutir siquiera la afirmación que hacen los propietarios de que las Reales órdenes expresadas infringen las disposiciones vigentes, y tal supuesto sólo cabe invocarlo ante jurisdicción distinta, única á la que compete apreciar la exactitud de los fundamentos y la verdad de las razones que se invocan:

Considerando que, la petición de que se declare que el importe total de las expropiaciones que comprende el proyecto ha de satisfacerse dentro de los sesenta días de otorgada la escritura para la ejecución de las obras, sin diferenciar la primera de la última sección, envuelve y significa la anulación del pliego de condiciones, publicado en la *Gaceta* de 6 de Febrero de 1905, como consecuencia de las Reales órdenes de 27 de Agosto de 1904 y 7 de Enero de 1905, pliego que dividía el proyecto para su ejecución en cuatro secciones, ó el pliego modificado, inserto en la *Gaceta* de 26 de Septiembre de 1908, consecuencia de la Real orden del 15 de Septiembre de 1908, el cual también dividía el proyecto en cuatro secciones, y dado el alcance de la petición, no es posible entrar á discutirla, por cuanto carece de competencia este

Ministerio para hacer declaraciones que contraríen sus actos anteriores, máxime cuando las Reales órdenes de 27 de Agosto de 1904 y 7 de Enero de 1905 son firmes, y la de 15 de Septiembre de 1908 está reclamada ante la jurisdicción contencioso administrativa:

Considerando que, si se estima que la petición referida no contraría las Reales órdenes citadas y significa sólo el deseo de que todas las expropiaciones se satisfagan en el expresado plazo de sesenta días, no corresponde á este Ministerio conocer de la reclamación, sino que los propietarios deben formularla ante el Ayuntamiento, que es á quien compete estimar primeramente la procedencia de la petición:

Considerando que, el único punto que pudiera ser admisible es la petición de que se abonen las mejoras hechas en las fincas, y tal cuestión, en el momento actual no es de la competencia de este Ministerio, correspondiendo al Ayuntamiento, en primera instancia, conocer de esta petición para decidir lo que estime oportuno, toda vez que, teniendo carácter de propietario del proyecto, y siendo de su cuenta en definitiva el satisfacer los gastos de ejecución del mismo, á su competencia corresponde dilucidar la razón de las reclamaciones, y con mayor motivo, por cuanto ha expedido las licencias, y conoce las condiciones que ha exigido para permitir las mejoras;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer se declare:

1.º Que este Ministerio carece de competencia para revisar, aclarar ó definir el alcance de las Reales órdenes citadas en el expediente relativo al proyecto de Reforma de la prolongación de la calle de Preciados y enlace de la plaza del Callao con la calle de Alcalá, Reales órdenes que entiende se han ajustado estrictamente á la ley.

Que, también carece de competencia para conocer de la petición de que sólo se estiman válidas las tasaciones de las fincas expropiadas del proyecto que sean aceptadas por los propietarios al satisfacerse la indemnización, ni para decidir que se practiquen nuevas tasaciones en aquellas fincas cuyos



Que las tasaciones se hicieron con la base de la renta declarada y del líquido imponible, y como recientemente y por la comprobación del Registro fiscal de riqueza urbana, se ha aumentado en casi todas las casas el tipo de valuación de la renta, si se mantienen las tasaciones hechas se perjudicarán gravemente los intereses de los propietarios;

Que se ha infringido la ley de Reforma interior en lo relativo á los plazos;

Que autorizando la ley una sola subasta, por procedimientos ilegales y por Reales órdenes se celebraron, además de la primera, otras tres subastas y un concurso;

Que el legislador estimó que el entredicho y los perjuicios durarían un año, y llevan más de siete en tales condiciones;

Que algunos propietarios han realizado mejoras en sus fincas, y varios de ellos por imposición del Ayuntamiento, y no hay ley alguna que obligue á perder el importe de tales mejoras;

Que si los propietarios hubieran recogido á tiempo el importe de la indemnización, habrían empleado mejor su capital, por cuanto en aquella época producía mayor interés que en la actualidad;

Que la Real orden de 26 de Agosto último, aprobatoria del proyecto modificado, es evidentemente nula, porque, habiendo entrado el expediente en este Ministerio el 25 de dicho mes, se aprobó á las veinticuatro horas, sin que los interesados tuvieran noticia de semejante trámite y pudieran interponer recursos contra el acuerdo municipal;

Que dicha Real orden y la de 20 de Noviembre siguiente, aprobando el concurso, ni se publicaron en la *Gaceta*, ni se notificaron á los interesados;

Que se impone adoptar una resolución, en armonía con lo que se hizo por Real orden de 7 de Octubre de 1902, por la que se aclaró el art. 20 de la ley de 18 de Marzo de 1895, estableciendo reglas para las tasaciones, y

Que por las razones expresadas, suplican se dicte una disposición que defina el alcance de las Reales órdenes de 27 de Agosto de 1904, 12 de Enero de 1905, 29 de Febrero y 15 de



propietarios ahora no se conformen con el justiprecio, por cuanto toda esta materia de las expropiaciones del proyecto fué tratada en las Reales ordenes aprobatorias del mismo, y no cabe volver sobre lo acordado que creó derechos á favor de tercero.

3.º Que por los mismos motivos, no puede conocer de la petición de que se satisfaga el importe de todas las expropiaciones del proyecto dentro de los sesenta días de otorgada la escritura para la ejecución del mismo, sin perjuicio de que puedan formular esta petición ante el Ayuntamiento si así lo juzgan procedente; y

4.º Que es también ante el Ayuntamiento donde los propietarios, si lo estiman oportuno, han de producir su reclamación en demanda de que se abonen las mejoras hechas en las fincas incluídas en el proyecto con posterioridad á la primera subasta.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 27 de Marzo de 1910.

*Merino.*

*Señor Gobernador de la provincia de Madrid.*

Septiembre de 1908 y 26 de Agosto y 20 de Noviembre de 1909, en la cual se declare:

1.º Que dichas Reales órdenes no han derogado, ni pueden derogar, los preceptos legales, contenidos en las leyes de 10 de Enero de 1879, 26 de Julio de 1892 y 18 de Marzo de 1895, referentes al pago de las expropiaciones, fuerza y eficacia de las tasaciones y tiempo legal para el pago.

2.º Que en virtud de los artículos 2.º de la ley de 18 de Marzo de 1895, 37 al 41 de la general de Expropiación forzosa de 10 de Enero de 1879 y 43 de su reglamento, se declare que sólo serán válidas las tasaciones de las fincas expropiadas que acepten sus propietarios al hacerse el pago de la indemnización, debiendo practicarse nueva tasación de los inmuebles, cuyos propietarios así lo soliciten, aplazándose el pago y la expropiación hasta que sea firme la nueva tasación practicada.

3.º Que el pago de las expropiaciones, todas del proyecto, cuyos propietarios lo soliciten, se efectuará dentro de los sesenta días, contados desde que se autorice la escritura para la realización del proyecto, aunque las fincas estén enclavadas en la segunda sección y en todas las posteriores del proyecto, y

4.º Que el importe de las obras y mejoras hechas por los propietarios en sus fincas con posterioridad á la primera subasta, única legal y que resultó desierta, debe ser de abono en todo caso al propietario, mediante la comprobación y tasación practicadas, según los preceptos de la ley.

Considerando que, desde el instante en que este Ministerio, cumpliendo la ley de 18 de Marzo de 1895, dictó las Reales órdenes que citan los recurrentes, recaídas en el expediente relativo al proyecto de «Reforma de la prolongación de la calle de Preciados y enlace de la plaza del Callao con la calle de Alcalá», lo hizo ateniéndose estrictamente á los preceptos vigentes en la materia; y, á partir del momento en que respectivamente expidió sus disposiciones, cesó su competencia para conocer y juzgar de sus propios actos:

Considerando que, si los reclamantes entendieron y entienden que las Reales órdenes citadas infringen disposiciones